

Reforma judicial, choque con el PAN y presión de la CNTE tensan el tablero político nacional

México cerró una jornada cargada de señales políticas: Morena avanzó una reforma judicial que dividió a su propia bancada, el caso Maru Campos se convirtió en una confrontación abierta entre PAN y Gobierno federal, la CNTE rompió diálogo con Gobernación tras hechos violentos en Oaxaca y el Gobierno presumió una baja de 49% en homicidios dolosos. La disputa ya no está en un solo frente: Congreso, Fiscalía, calles y narrativa pública están operando al mismo tiempo.

El primer punto de tensión ocurrió en la Cámara de Diputados. Morena y sus aliados aprobaron una reserva dentro de la reforma judicial para permitir que magistrados electorales puedan buscar reelección en 2028. La medida provocó críticas inmediatas de la oposición, pero también incomodidad dentro del propio oficialismo.

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, llamó a frenar lo que consideró una contradicción con el sentido original de la reforma judicial. Su argumento fue directo: si la reforma prometía terminar con élites enquistadas en tribunales, permitir nuevas permanencias en el Tribunal Electoral genera un mensaje político complicado. Del otro lado, Ricardo Monreal respaldó el ajuste.

El tema no es menor. En plena ruta hacia 2027, cualquier modificación al diseño electoral y judicial se lee bajo sospecha. La oposición acusa que el oficialismo intenta acomodar reglas a su favor; Morena responde que busca ordenar el sistema. Pero la fractura interna dejó una fotografía incómoda: ni dentro del bloque gobernante hay consenso pleno.

El segundo foco de la jornada fue Chihuahua. Maru Campos acudió a la FGR en la Ciudad de México, pero no aceptó comparecer como testigo en los términos planteados por la autoridad. Su defensa afirmó que el citatorio buscaba colocarla en una condición jurídica distinta, bajo una supuesta entrevista relacionada con el caso de agentes de la CIA en Chihuahua.

La gobernadora acusó persecución política y fue arropada por dirigentes del PAN, legisladores y figuras opositoras. Lo jurídico se volvió político en cuestión de minutos. Afuera de la Fiscalía, el PAN convirtió el acompañamiento en un acto público contra la 4T, buscando instalar la narrativa de uso faccioso de instituciones.

El Gobierno federal, mientras tanto, intenta sostener otro mensaje: seguridad y resultados. Claudia Sheinbaum informó que los homicidios dolosos bajaron 49% entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, al pasar de 86.9 a 44.3 casos diarios. Omar García Harfuch destacó detenciones, decomisos y desmantelamiento de laboratorios clandestinos como parte de la estrategia nacional.

Pero la reducción de homicidios convive con una presión externa creciente. Estados Unidos elevó el tono contra los cárteles, mientras en México se insiste en que la cooperación bilateral debe respetar la soberanía. La narrativa oficial busca equilibrio: cooperación sí, subordinación no.

En las calles, la CNTE volvió a tensar la relación con el Gobierno federal. Después de hechos violentos en Mitla, Oaxaca, donde se reportaron agresiones contra manifestantes y vehículos incendiados, la Sección 22 suspendió el diálogo con Gobernación. El conflicto magisterial dejó de ser sólo una mesa de negociación: ahora es un problema de gobernabilidad.

La CNTE mantiene capacidad de presión y conoce el momento político. Con el Mundial cada vez más cerca, cualquier bloqueo o confrontación gana visibilidad nacional e internacional. Para el Gobierno, el cálculo es complejo: negociar sin parecer débil y contener sin provocar una crisis mayor.

En el terreno institucional, el IMSS aparece como pieza estratégica del sistema público de salud. Zoé Robledo participó en el seguimiento de la Red Integrada de Servicios de Salud de la Selva Lacandona, en Chiapas, mientras Banxico proyectó para 2026 una creación de 360 mil empleos afiliados al IMSS. Sin embargo, el banco central también redujo su previsión de crecimiento económico a 1.1%, señal de que el entorno viene cuesta arriba.

El mensaje de fondo es claro: México entra a una etapa donde las instituciones tendrán que demostrar capacidad real de operación. No bastará con discursos de transformación, ni con conferencias, ni con diagnósticos optimistas. La ciudadanía medirá resultados: seguridad, empleo, salud, justicia y estabilidad.

La política mexicana está entrando en modo alta presión. Y cuando el tablero se calienta al mismo tiempo en Congreso, Fiscalía, sindicatos y economía, la diferencia entre estrategia y ocurrencia se nota rápido. Ahí no hay margen para improvisar: el país necesita conducción fina, porque el horno político ya está encendido.